PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
XXV LEGISLATURA

DEPENDENCIA: Congreso del Estado
SECCIÓN: Diputados
OFICIO No. JC/138/26

2517

DIP. ELIGIO VALENCIA LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

P R E S E N T E.-

Anteponiendo un cordial saludo, me dirijo a Usted para solicitarle de la manera más atenta gire las instrucciones necesarias a quien corresponda, para que sea incluida en el orden del día de Sesión de Pleno a celebrarse el día 8 de octubre del año 2026, la presente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La propuesta tiene por objeto actualizar y fortalecer el marco jurídico estatal frente a los efectos del cambio climático, mediante el fortalecimiento de la coordinación entre autoridades, los instrumentos de planeación, información, seguimiento y evaluación, así como las políticas de mitigación, adaptación, prevención de riesgos y resiliencia. Asimismo, incorpora la seguridad hídrica, la protección y restauración de ecosistemas, la movilidad y el desarrollo urbano sostenible, la participación ciudadana, la justicia climática, la educación e investigación, y mecanismos de financiamiento e instrumentos económicos para fortalecer la política climática estatal.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde a la presente, quedo de Usted como su atento y seguro servidor.

A T E N T A M E N T E
Mexicali, B.C. a 6 de octubre de 2026

DIP. JAIME EDUARDO CANTÓN ROCHA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO MORENA

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
XXV LEGISLATURA
RECIBIDO
06 OCT 2026
15:00
OFICIALIA DE PARTES

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
XXV LEGISLATURA
06 OCT 2026
DESPACHADO
DIP. JAIME CANTÓN

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
XXV LEGISLATURA

DEPENDENCIA: Congreso del Estado
SECCIÓN: Diputados
OFICIO No. JC/138/26

DIP. ELIGIO VALENCIA LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

P R E S E N T E.-

Anteponiendo un cordial saludo, me dirijo a Usted para solicitarle de la manera más atenta gire las instrucciones necesarias a quien corresponda, para que sea incluida en el orden del día de Sesión de Pleno a celebrarse el día 8 de octubre del año 2026, la presente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La propuesta tiene por objeto actualizar y fortalecer el marco jurídico estatal frente a los efectos del cambio climático, mediante el fortalecimiento de la coordinación entre autoridades, los instrumentos de planeación, información, seguimiento y evaluación, así como las políticas de mitigación, adaptación, prevención de riesgos y resiliencia. Asimismo, incorpora la seguridad hídrica, la protección y restauración de ecosistemas, la movilidad y el desarrollo urbano sostenible, la participación ciudadana, la justicia climática, la educación e investigación, y mecanismos de financiamiento e instrumentos económicos para fortalecer la política climática estatal.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde a la presente, quedo de Usted como su atento y seguro servidor.

A T E N T A M E N T E
Mexicali, B.C. a 6 de octubre de 2026

DIP. JAIME EDUARDO CANTÓN ROCHA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO MORENA

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA XXV LEGISLATURA
06 OCT 2026
DESPACHADO
DIP. JAIME CANTÓN

DIP. ELIGIO VALENCIA LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E.-

El suscrito, **Diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha** a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario de **MORENA**, en uso de la facultad que confiere lo dispuesto por los artículos 27 fracción I y 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como los artículos 110 fracción I, 112, 115 fracción I, 116, 117, 160, 161 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración de la XXV Legislatura del Congreso del Estado, la presente, **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

El cambio climático constituye uno de los principales desafíos ambientales, sociales y económicos para Baja California, debido a sus efectos sobre los recursos naturales, la disponibilidad y seguridad del agua, los ecosistemas, la infraestructura, la salud de la población, el desarrollo urbano y las actividades productivas del Estado.

En este contexto, resulta necesario que el marco jurídico estatal en materia de cambio climático responda a las condiciones actuales y futuras de Baja California,

fortaleciendo los mecanismos de prevención, mitigación y adaptación, así como la coordinación entre las autoridades estatales y municipales, la participación de la sociedad y el acceso a la información.

La presente iniciativa tiene como antecedente el **Proceso participativo para la actualización de la Ley de Prevención, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático para el Estado de Baja California (LPMACCBC), desarrollado entre julio de 2024 y marzo de 2025**, mediante un proceso impulsado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y POLEA, con apoyo de UK PACT. Dicho proceso incluyó reuniones técnicas, entrevistas con personas expertas, participación ciudadana y actividades con diversos sectores de la sociedad.

El proceso participativo permitió identificar áreas de oportunidad en el marco jurídico vigente y formular propuestas encaminadas a fortalecer la política climática estatal, particularmente en materia de coordinación institucional, instrumentos de planeación, participación ciudadana, información, financiamiento, justicia climática, adaptación, mitigación y protección de grupos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, con posterioridad al proceso participativo se desarrollaron actividades de seguimiento y vinculación con distintos sectores y comunidades, con el propósito de ampliar y fortalecer los insumos técnicos y sociales considerados para la actualización del marco jurídico estatal.

II. ANTECEDENTES Y NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO

La actualización de la LPMACCBC parte de un diagnóstico construido mediante la participación de distintos sectores. Durante el proceso se realizaron entrevistas con

personas expertas pertenecientes a los ámbitos académico, público y de la sociedad civil, además de ejercicios de consulta pública.

Entre las principales necesidades identificadas se encuentran el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y consulta, la actualización de los instrumentos de planeación, la incorporación de conceptos y compromisos climáticos actuales, una mayor participación social y académica, la definición clara de responsabilidades institucionales y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y seguimiento.

Asimismo, se identificó la necesidad de contar con disposiciones que permitan establecer responsabilidades más claras para las autoridades competentes, mejorar los mecanismos de evaluación y seguimiento y fortalecer los instrumentos que permitan convertir los objetivos climáticos en acciones concretas.

Por ello, la actualización de la legislación no debe limitarse a modificar conceptos aislados, sino que debe procurar una estructura jurídica que permita articular la política climática con la planeación territorial, ambiental, urbana, económica, social y de infraestructura del Estado.

III. LAS CONDICIONES PARTICULARES DE BAJA CALIFORNIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Baja California presenta características territoriales, ambientales, económicas y sociales que requieren una política climática acorde con su realidad. La condición árida y semiárida de gran parte de su territorio, su extensión costera, la concentración urbana y las presiones sobre los recursos naturales generan condiciones particulares de vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático.

La información oficial disponible confirma que estas condiciones no constituyen únicamente escenarios futuros. De acuerdo con la Plataforma de Estados y Municipios en materia de Cambio Climático, elaborada con información del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Baja California presenta una tendencia de incremento en la temperatura máxima de **0.038 °C por año** y de **0.127 °C por año en la temperatura mínima**, mientras que la precipitación total acumulada anual presenta una tendencia de decremento de **0.537 milímetros por año**.

De igual manera, la disponibilidad de agua constituye uno de los principales factores de presión ambiental para el Estado. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, diversos acuíferos de Baja California presentan disponibilidad media anual negativa. Entre ellos se encuentran el acuífero de Tijuana, con una disponibilidad de **-1.66 millones de metros cúbicos anuales**; Guadalupe, con **-17.96 millones**; Ojos Negros, con **-4.43 millones**; y Valle de Mexicali, con aproximadamente **-432.04 millones de metros cúbicos anuales**. Estos balances evidencian que la seguridad hídrica representa una condición estructural que debe ser considerada dentro de la política estatal de adaptación al cambio climático.

A estas condiciones se suman problemáticas como la contaminación de cuerpos de agua, la intrusión salina, la erosión costera, el deterioro de ecosistemas, la expansión urbana desordenada, la contaminación atmosférica, la generación de residuos y la existencia de fenómenos extremos como olas de calor, sequías, lluvias torrenciales e inundaciones.

Desde una perspectiva jurídica, estas circunstancias también deben analizarse a la luz del derecho humano a un medio ambiente sano. En el **Amparo en Revisión**

610/2019, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estableció la relevancia del principio de precaución ambiental y de la utilización de la mayor información científica posible para la toma de decisiones que puedan generar riesgos al medio ambiente. La Suprema Corte señaló, además, que los posibles beneficios económicos de una medida deben ser ponderados frente a sus potenciales riesgos ambientales y a las obligaciones estatales relacionadas con la reducción de emisiones y el combate al cambio climático.

Este criterio resulta relevante para la legislación estatal, toda vez que exige que las decisiones públicas en materia ambiental y climática se sustenten en información científica, particularmente cuando existan riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud de la población.

Estas condiciones demuestran que la legislación estatal debe contemplar la adaptación al cambio climático como una política transversal, vinculada con la prevención de riesgos, la seguridad hídrica, la protección de los ecosistemas, la infraestructura y la salud de la población. En consecuencia, la actualización de la legislación debe partir de evidencia científica y datos territoriales que permitan identificar las vulnerabilidades específicas del Estado y orientar las decisiones públicas hacia su prevención y reducción.

IV. FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE MITIGACIÓN

La actualización de la Ley debe fortalecer las acciones dirigidas a reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y, al mismo tiempo, impulsar alternativas que permitan avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

El proceso participativo identificó oportunidades relacionadas con la conservación y restauración de ecosistemas forestales, costeros y marinos, incluyendo aquellos que funcionan como reservorios de carbono.

Asimismo, se identificaron áreas de oportunidad en materia de eficiencia energética, energías renovables, economía circular, manejo de residuos y aguas residuales, así como movilidad sostenible.

En particular, se señaló el potencial de Baja California para el aprovechamiento de energías renovables, especialmente la energía solar, aunque también se destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas, los mecanismos de inversión y la participación comunitaria.

En consecuencia, la iniciativa busca que la legislación proporcione bases jurídicas suficientes para promover acciones de mitigación mediante políticas públicas coordinadas, instrumentos económicos, mecanismos de financiamiento, innovación y participación de los sectores público, privado, académico y social.

V. ADAPTACIÓN, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y RESILIENCIA

La adaptación constituye uno de los elementos centrales de la presente actualización.

Los resultados del proceso participativo evidenciaron la necesidad de fortalecer la infraestructura resiliente, los sistemas de alerta temprana, las estrategias de seguridad hídrica y la capacidad de respuesta frente a fenómenos climáticos extremos.

De igual manera, se identificó la importancia de fortalecer la vinculación entre la política climática y la gestión integral de riesgos, particularmente mediante la coordinación con las autoridades de protección civil.

Por ello, la iniciativa contempla fortalecer los mecanismos de prevención, identificación y atención de riesgos climáticos, procurando que la toma de decisiones se sustente en información científica, estudios técnicos, escenarios climáticos y análisis de vulnerabilidad.

La adaptación debe orientarse no solamente a responder después de que ocurra un fenómeno extremo, sino a prevenir y reducir sus posibles consecuencias mediante planeación, infraestructura adecuada, información pública, educación y participación comunitaria.

VI. SEGURIDAD HÍDRICA COMO ELEMENTO DE LA POLÍTICA CLIMÁTICA

El agua constituye uno de los principales elementos de vulnerabilidad identificados en el Estado.

Durante el proceso participativo fueron señaladas problemáticas relacionadas con la escasez, sobreexplotación y contaminación del recurso hídrico, así como con la utilización insuficiente de agua tratada, la intrusión salina y la erosión de los suelos y zonas costeras.

En este sentido, la legislación climática debe reconocer la seguridad hídrica como un componente fundamental de las políticas de adaptación.

La actualización propuesta busca fortalecer la coordinación entre las políticas climáticas y aquellas relacionadas con el agua, la infraestructura, el ordenamiento

territorial y el desarrollo urbano, con el propósito de reducir vulnerabilidades y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar escenarios presentes y futuros de estrés hídrico.

VII. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

El cambio climático también se encuentra estrechamente relacionado con la manera en que se planifican y desarrollan las ciudades.

El proceso participativo identificó que la expansión urbana desordenada puede contribuir a la pérdida de vegetación, generar deficiencias en el manejo del agua y aumentar la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático.

Asimismo, se identificaron retos relacionados con la movilidad y la falta de infraestructura suficiente para favorecer alternativas sostenibles de transporte.

En materia de movilidad, el diagnóstico estatal señala la necesidad de avanzar en infraestructura para transporte público, movilidad activa y electromovilidad, así como en una planeación que permita reducir la dependencia excesiva del automóvil particular.

Por ello, la iniciativa propone fortalecer la vinculación entre la política climática, el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la movilidad, procurando que las decisiones públicas incorporen criterios de sostenibilidad, prevención de riesgos, resiliencia y reducción de emisiones.

VIII. JUSTICIA CLIMÁTICA Y PROTECCIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Los efectos del cambio climático no afectan de la misma manera a toda la población.

Por ello, una política climática integral debe considerar las condiciones sociales y económicas que pueden incrementar la vulnerabilidad de determinados grupos.

Durante el proceso participativo se destacó la necesidad de incorporar criterios de justicia climática y de desarrollar medidas específicas para personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, comunidades indígenas y personas migrantes.

También se señaló la importancia de incorporar la perspectiva de género y considerar los impactos diferenciados que pueden enfrentar las mujeres y otros grupos de población.

La presente iniciativa busca, por tanto, fortalecer un enfoque de justicia climática que permita identificar las condiciones de vulnerabilidad y orientar las políticas públicas hacia la prevención, protección y reducción de desigualdades frente a los impactos climáticos.

IX. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Uno de los principales elementos del proceso de actualización fue precisamente la participación de diversos sectores de la sociedad.

El proceso incluyó entrevistas con personas expertas y un mecanismo de participación mediante el cual se recibieron **130 respuestas ciudadanas**. Asimismo, posteriormente se desarrollaron actividades de seguimiento con municipios, academia, sector privado y comunidades originarias.

Estos antecedentes evidencian la importancia de que la legislación establezca mecanismos permanentes de participación y no únicamente ejercicios aislados de consulta.

Por ello, la iniciativa busca fortalecer el acceso a la información climática, la participación ciudadana, los mecanismos de consulta, los observatorios y otros instrumentos que permitan a la sociedad conocer, participar y dar seguimiento a las políticas públicas en materia de cambio climático.

La información deberá constituir una herramienta para la toma de decisiones, la evaluación de resultados y la rendición de cuentas.

X. FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

La atención del cambio climático requiere la participación coordinada de distintas dependencias y órdenes de gobierno.

El proceso participativo identificó la necesidad de establecer con mayor claridad las funciones y responsabilidades de las instituciones, fortalecer la coordinación entre el Estado y los municipios y mejorar los mecanismos de comunicación y seguimiento.

En consecuencia, resulta necesario fortalecer los órganos e instrumentos de coordinación de la política climática, procurando una participación efectiva de las

autoridades estatales y municipales, así como de los sectores académico, social y privado.

La actualización de la Ley deberá permitir que las políticas climáticas tengan continuidad y que los programas y acciones puedan ser evaluados mediante indicadores y mecanismos de seguimiento.

XI. INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Una política climática eficaz requiere información actualizada y mecanismos que permitan medir los resultados obtenidos.

Durante el proceso participativo se identificó la necesidad de actualizar y fortalecer los sistemas de información, los indicadores de cambio climático, los análisis de vulnerabilidad y los inventarios de emisiones.

Por ello, la iniciativa busca fortalecer los instrumentos de planeación y evaluación, de manera que las decisiones públicas puedan sustentarse en información científica y técnica.

Asimismo, se considera necesario establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a los programas, evaluar su cumplimiento y garantizar la continuidad de las acciones climáticas más allá de los periodos administrativos.

XII. FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

La existencia de objetivos y obligaciones legales requiere mecanismos que permitan hacerlos efectivos y garantizar la continuidad de las acciones de mitigación, adaptación y resiliencia.

El proceso participativo identificó como una de las áreas de oportunidad el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento para la política climática, así como la necesidad de contar con instrumentos económicos y financieros que permitan apoyar de manera permanente las acciones ambientales y climáticas.

En este sentido, resulta necesario avanzar hacia **esquemas sostenibles de captación de recursos e incentivos ambientales**, mediante el fortalecimiento de instrumentos económicos, fiscales y financieros que, dentro del ámbito de competencia estatal, permitan generar recursos para la prevención, mitigación, adaptación y restauración ambiental.

Dentro de estos mecanismos podrán considerarse **impuestos o contribuciones de carácter ambiental, incentivos y estímulos para la reducción de emisiones, instrumentos para fomentar la conservación y restauración de ecosistemas y otros mecanismos económicos** que permitan orientar la actividad productiva y el comportamiento de los distintos sectores hacia modelos más sostenibles, de conformidad con la legislación aplicable.

De manera particular, se considera necesario fortalecer el **Fondo Ambiental** como uno de los instrumentos permanentes para financiar la política ambiental y climática del Estado, procurando que cuente con fuentes de recursos suficientes y estables.

En este sentido, deberán establecerse mecanismos que permitan que los **recursos provenientes de multas y sanciones derivadas de infracciones ambientales sean destinados al Fondo Ambiental**, en los términos que establezca la legislación hacendaria aplicable, de manera que los recursos generados por el incumplimiento de las disposiciones ambientales contribuyan directamente a

financiar acciones de prevención, restauración, conservación, vigilancia y atención de los impactos ambientales y climáticos.

La importancia de contar con mecanismos permanentes de financiamiento encuentra sustento en la jurisprudencia **1a./J. 173/2025 (11a.), de registro digital 2031084**, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio establece que la extinción del Fondo para el Cambio Climático constituyó una medida regresiva que afectó el derecho humano a un medio ambiente sano, precisamente por eliminar mecanismos de financiamiento, evaluación y fiscalización de proyectos y programas destinados a enfrentar la problemática ambiental.

Este criterio evidencia la relevancia constitucional de contar con mecanismos financieros que permitan dar continuidad, evaluación y fiscalización a las políticas ambientales y climáticas, así como evitar retrocesos injustificados en el nivel de protección alcanzado del derecho humano a un medio ambiente sano.

La iniciativa contempla, por tanto, fortalecer el Fondo Ambiental y establecer bases para una política de financiamiento climático que combine recursos públicos, instrumentos económicos, incentivos ambientales y mecanismos de captación orientados al cumplimiento de los objetivos de mitigación, adaptación y protección ambiental.

XIII. EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN

La transición hacia una sociedad resiliente frente al cambio climático requiere también fortalecer las capacidades de las instituciones y de la población.

Durante el proceso participativo se señaló la importancia de impulsar la educación ambiental, la profesionalización de las personas servidoras públicas, la investigación científica, la innovación y la difusión del conocimiento.

Por ello, la actualización propuesta incorpora la necesidad de fortalecer acciones de capacitación y educación climática, así como mecanismos de colaboración con instituciones académicas y centros de investigación.

La generación y aplicación del conocimiento científico debe constituir un elemento permanente de la política climática estatal.

XIV. PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

Los ecosistemas de Baja California desempeñan funciones fundamentales para la regulación ambiental y la reducción de vulnerabilidades.

El proceso participativo destacó la importancia de fortalecer la conservación y restauración de ecosistemas forestales, costeros y marinos, así como de áreas naturales protegidas.

De igual manera, se identificó la necesidad de incorporar infraestructura verde y mecanismos de restauración ambiental como herramientas para enfrentar los efectos del cambio climático.

En consecuencia, la iniciativa busca fortalecer la protección de los ecosistemas y promover acciones que permitan utilizar sus funciones naturales como parte de las estrategias de adaptación y mitigación.

XV. PARTICIPACIÓN DE COMUNIDADES ORIGINARIAS Y ENFOQUE DE INCLUSIÓN

La política climática estatal debe considerar los conocimientos, necesidades y condiciones particulares de las comunidades que habitan el territorio de Baja California.

El proceso de actualización incorporó posteriormente actividades de trabajo con comunidades originarias de San José de la Zorra y San Antonio Necua, lo que constituye un antecedente relevante para fortalecer la participación de estos sectores en las políticas climáticas.

Asimismo, el proceso participativo identificó la necesidad de reconocer los conocimientos comunitarios y de garantizar mecanismos adecuados de participación para los pueblos y comunidades indígenas.

Por ello, la iniciativa busca establecer bases para una política climática incluyente, participativa y respetuosa de las características culturales y sociales de las comunidades del Estado.

XVI. RESPONSABILIDAD, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO

Una legislación climática efectiva requiere mecanismos de seguimiento, evaluación y, en su caso, responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones establecidas.

El proceso participativo señaló la necesidad de fortalecer los mecanismos de monitoreo, supervisión y sanción, así como de establecer responsabilidades claras para las autoridades y demás sujetos obligados.

En consecuencia, la iniciativa busca fortalecer los mecanismos institucionales que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos climáticos y establecer las consecuencias jurídicas correspondientes cuando resulte procedente.

XVII. CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar y fortalecer la Ley de Prevención, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático para el Estado de Baja California, a partir de las necesidades identificadas mediante un proceso participativo amplio.

Entre sus principales objetivos se encuentran:

1. Fortalecer la coordinación entre las autoridades estatales y municipales en materia de cambio climático.
2. Actualizar los principios y conceptos que orientan la política climática estatal.
3. Fortalecer los instrumentos de planeación, información, seguimiento y evaluación.
4. Incorporar criterios de adaptación, resiliencia y prevención de riesgos climáticos.
5. Fortalecer las políticas de mitigación y reducción de emisiones.
6. Incorporar la seguridad hídrica como elemento fundamental de la adaptación climática.
7. Vincular la política climática con el ordenamiento territorial, desarrollo urbano, infraestructura y movilidad sostenible.
8. Fortalecer la protección y restauración de ecosistemas.
9. Impulsar la participación ciudadana y el acceso a la información.

10. Incorporar criterios de justicia climática y protección de grupos en situación de vulnerabilidad.
11. Fortalecer la participación de comunidades originarias y el reconocimiento de conocimientos comunitarios.
12. Promover la educación, capacitación, investigación e innovación en materia climática.
13. Fortalecer los mecanismos de financiamiento e instrumentos económicos, incluyendo esquemas de captación, incentivos ambientales y mecanismos para fortalecer el Fondo Ambiental.
14. Mejorar los mecanismos de supervisión, seguimiento, evaluación y responsabilidad.

Estos objetivos buscan que la legislación estatal cuente con instrumentos jurídicos capaces de responder a los retos ambientales, sociales, económicos y territoriales que enfrenta Baja California frente al cambio climático.

XVIII. CONSIDERACIONES FINALES

La actualización de la Ley de Prevención, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático para el Estado de Baja California representa una oportunidad para fortalecer el marco jurídico estatal a partir de las condiciones particulares del territorio y de las necesidades expresadas por diversos sectores de la sociedad.

El **proceso participativo desarrollado entre julio de 2024 y marzo de 2025**, mediante la participación de autoridades, personas expertas, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y ciudadanía, permitió reunir propuestas orientadas a fortalecer la política climática estatal. A este proceso se sumaron posteriormente actividades de seguimiento y vinculación con

municipios, academia, sector privado y comunidades, que contribuyeron a ampliar los elementos considerados para la presente propuesta.

La iniciativa parte de la necesidad de que la política climática sea transversal, preventiva, participativa y sustentada en información científica y técnica, particularmente frente a las condiciones de vulnerabilidad que presenta Baja California en materia de temperatura, disponibilidad de agua, infraestructura, ecosistemas y fenómenos climáticos extremos.

Asimismo, busca fortalecer la coordinación institucional, la planeación, la participación ciudadana, la justicia climática y los instrumentos de financiamiento y evaluación, de manera que las disposiciones legales puedan traducirse en acciones públicas concretas.

En particular, el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y del Fondo Ambiental pretende dotar a la política climática estatal de instrumentos que permitan generar, administrar y aplicar recursos destinados de manera efectiva a la prevención, mitigación, adaptación, restauración, conservación y atención de los impactos derivados del cambio climático.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales aplicables, se somete a consideración del Honorable Congreso del Estado de Baja California la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se actualiza la Ley de Prevención, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático para el Estado de Baja California.

La presente propuesta tiene como propósito contribuir a que Baja California cuente con un marco jurídico climático actualizado, capaz de fortalecer la prevención, mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático, considerando las

características ambientales, territoriales, sociales y económicas propias del Estado, así como la participación de la sociedad en la construcción de soluciones.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 27 fracción I y 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como los artículos 110 fracción I, 112, 115 fracción I, 116, 117, 160, 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de la XXV Legislatura del Congreso del Estado la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, interés general y observancia obligatoria en el Estado de Baja California, en concurrencia con los municipios.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano mediante la regulación y conducción de la política estatal de cambio climático.
II. Contribuir al cumplimiento de la Contribución Determinada a nivel Nacional, asegurando su incorporación transversal en la planeación estatal, así como contribuir a la trayectoria nacional para alcanzar emisiones netas cero para mediados de siglo.
III. Establecer la concurrencia de atribuciones del Estado y sus municipios en la elaboración e implementación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático, la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, y la atención a pérdidas y daños ocasionados por los efectos adversos del cambio climático.

IV. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para que el Estado contribuya a las metas establecidas por México en los instrumentos internacionales en materia de cambio climático.

V. Reducir la situación de vulnerabilidad de la población y los ecosistemas frente a los efectos adversos del cambio climático, con especial atención a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, zonas costeras y áreas urbanas.

VI. Fomentar la educación, investigación, desarrollo, transferencia de tecnología, innovación y difusión de información en materia de adaptación, mitigación y pérdidas y daños derivados del cambio climático.

VII. Establecer las bases para fomentar la participación ciudadana, garantizar el acceso a la información y promover la justicia climática.

VIII. Promover la transición hacia una economía circular, competitiva, sustentable, de bajas emisiones y resiliente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos asociados con el cambio climático.

IX. Integrar en la política climática estatal la perspectiva de género, derechos humanos, la interculturalidad y la inclusión social para prevenir exclusiones y
reducir brechas, priorizando a las poblaciones que enfrentan desigualdades estructurales.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. **Acuerdo de Escazú**: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

II. **Acuerdo de París:** Convenio adoptado mediante la decisión 1/CP.21 durante el 21er período de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

III. **Adaptación basada en los ecosistemas:** Estrategia que aprovecha las soluciones basadas en la naturaleza y los servicios ecosistémicos para enfrentar los efectos del cambio climático.

IV. **Adaptación:** Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o actuales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos.

V. **Atlas de Riesgos:** La colección de mapas a escala con características topográficas de uso del suelo, hidrología, vías de comunicación, equipamiento e información adicional del Estado y de sus municipios, en que se encuentren sobrepuestas zonas, áreas y regiones que indiquen

el riesgo potencial que amenaza a la población de Baja California ante los efectos del cambio climático, así como sus bienes y los servicios estratégicos y entorno.

VI. **Bienes naturales**: Elementos interdependientes de un sistema natural y complejo que sostienen la vida de los ecosistemas, las personas y otras especies.

VII. **Comisión Intersecretarial**: Comisión Estatal Intersecretarial de Cambio Climático.

VIII. **Consejo**: Consejo Estatal de Cambio Climático.

IX. **Contribución determinada a nivel nacional:** Conjunto de objetivos y metas, asumidas por México, en el marco del Acuerdo de París, en materia de mitigación y adaptación al cambio climático para cumplir los objetivos a largo plazo de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.

X. **Economía Circular**: Sistema económico restaurativo y regenerativo que busca mantener los productos, componentes y materiales en uso, maximizando su valor durante su vida útil.

XI. **Efectos adversos del Cambio Climático**: Variaciones bruscas en el medio ambiente que tienen efectos nocivos significativos en los ecosistemas, la salud humana y los sistemas socioeconómicos.

XII. **Emisión:** La liberación de gases de efecto invernadero o sus precursores, en la atmósfera, en un área y en un espacio de tiempo específicos;

XIII. **Estado:** El Estado de Baja California.

XIV. **Fuentes emisoras:** Actividades, instalaciones o procesos productivos que, de manera directa o indirecta, emiten a la atmósfera gases de efecto invernadero y/o compuestos contaminantes que contribuyen al cambio climático y a la degradación de la calidad del aire.

XV. **Gases y/o compuestos de efecto invernadero:** Componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, sus precursores y partículas que absorben y emiten radiación infrarroja en la misma.

XVI. **INECC:** Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

XVII. **Inventario**: Inventario Estatal de Emisiones.

XVIII. **Ley**: Ley de Cambio Climático para el Estado de Baja California.

XIX. **Ley Ambiental:** Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California.

XX. **Pérdidas y Daños:** Aquellos impactos adversos derivados de fenómenos climáticos extremos o de evolución lenta asociados al cambio climático

que no han podido ser evitados ni gestionados mediante medidas de mitigación o adaptación o que han excedido los límites de adaptación determinados. Estos impactos pueden ser de carácter económico o no económico, tangibles o intangibles, y afectan tanto a los sistemas humanos como naturales, así como a las dimensiones sociales, culturales y humanas de las comunidades.

XXI. **Perspectiva de Género:** Instrumento metodológico que analiza las relaciones de poder para identificar desigualdades y dimensionar la vulnerabilidad diferenciada de mujeres y hombres ante el cambio climático, permitiendo diseñar acciones de justicia e igualdad.

XXII. **Procuraduría**: Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California.

XXIII. **Programa Estatal**: Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático.

XXIV. **Registro:** Registro Estatal de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

XXV. **Secretaría**: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California.

XXVI. **Soluciones Basadas en la Naturaleza:** Acciones que abordan retos sociales clave mediante la protección, la gestión sostenible y la restauración de ecosistemas naturales y modificados, beneficiando tanto a la biodiversidad como al bienestar humano.

XXVII. **Soluciones climáticas basadas en el océano:** Acciones, medidas o intervenciones que utilizan de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros, incluidos manglares, marismas, pastos marinos, arrecifes y demás sistemas oceánicos, para contribuir a la mitigación y adaptación al cambio

climático mediante su conservación, restauración, manejo y uso responsable, asegurando la integridad ecológica, la resiliencia comunitaria y el mantenimiento de sus funciones y servicios ambientales.

XXVIII. **Sumidero:** Cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe de la atmósfera un gas de efecto invernadero, uno de sus precursores o un aerosol.

XXIX. **Transición justa hacia una economía sostenible:** Proceso gradual de transformación hacia modelos de desarrollo bajo en emisiones y resilientes al clima, que integra criterios ambientales, sociales y económicos, asegura el respeto a los derechos humanos y laborales, y promueve la participación social, con el fin de que los beneficios y costos de la acción climática se distribuyan de manera equitativa.

Artículo 4. Los términos no previstos en la presente Ley se interpretarán de

acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Cambio Climático, los acuerdos internacionales en la materia de los que México es parte, la Ley de Protección del Ambiente para el Estado de Baja California y las definiciones previstas por la ciencia.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS

Artículo 5. En la formulación y conducción de la política estatal de cambio climático, se deberán observar los siguientes principios:

I. **Equidad intergeneracional**: La política estatal de cambio climático debe buscar proporcionar a las generaciones futuras un medio ambiente estable que les brinde oportunidades de desarrollo equivalentes a las que tienen o tuvieron las generaciones actuales.

II. **Precautorio**: Cuando existan indicios razonables de que una actividad pueda causar daños graves o irreversibles al medio ambiente, la falta de certeza científica no será motivo para postergar la adopción de medidas eficaces que prevengan dichos daños.

III. **Preventivo**: Se aplicarán medidas anticipadas necesarias para evitar daños ambientales previsibles, basadas en evidencia científica que demuestre la existencia de riesgos conocidos.

IV. **Progresividad**: Los objetivos para la política estatal de cambio climático deberán ser logrados en forma progresiva, gradual, constante y sistemática, garantizando el respeto a los derechos humanos, así como la protección al medio ambiente.

V. **Quien contamina paga**: Quien contamina debe asumir la responsabilidad por los daños ocasionados, así como por la reparación y compensación de dichos daños.

VI. **Responsabilidades comunes pero diferenciadas**: Los distintos sectores, comunidades, localidades o regiones tendrán una distribución equitativa de responsabilidades teniendo en cuenta las capacidades y circunstancias específicas de cada una.

VII. **In dubio pro natura**: Siempre que en un proceso haya una colisión entre el medio ambiente y otros intereses, y los daños o riesgos no sean claros por falta de información, deberá prevalecer la interpretación que garantice la conservación del medio ambiente.

VIII. **Transición Justa:** El Estado deberá procurar que la transición hacia una economía circular, sustentable y de bajas emisiones sea equitativa e inclusiva. Para ello, se promoverán programas de capacitación, reconversión laboral y desarrollo de nuevas oportunidades económicas para los trabajadores y comunidades impactadas por la descarbonización, integrando enfoques de género, interculturalidad e intergeneracional, y

IX. **Transparencia, acceso a la información y a la justicia:** Considerando que los distintos órdenes de gobierno deben facilitar y fomentar la concientización de la población, poniendo a su disposición la información relativa al cambio climático y proporcionando acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables;

Artículo 6. En la aplicación de esta Ley, se estará a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los acuerdos internacionales de los que México es parte, la Ley General de Cambio Climático, y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO SEGUNDO

DISTRIBUCIÓN DE ATRIBUCIONES

CAPÍTULO I

AUTORIDADES ESTATALES

Artículo 7. El Poder Ejecutivo del Estado y los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de cambio climático, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y la Ley General de Cambio Climático.

Artículo 8. Corresponden a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal de cambio climático en concordancia con la política nacional.

II. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, entidades federativas y los municipios para la implementación de acciones para la mitigación y adaptación.

III. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático.

IV. Promover la participación corresponsable de la sociedad en la adaptación, mitigación y la atención a pérdidas y daños, de conformidad con lo dispuesto en leyes aplicables.

V. Diseñar y promover el establecimiento y aplicación de incentivos que fomenten la ejecución de acciones para el cumplimiento del objeto de la ley.

VI. Impulsar, en el ámbito de su compertencia, acciones que visibilicen y atiendan la relación entre el cambio climático y las tareas de cuidados, procurando reducir las brechas de desigualdad.

VII. Emitir las declaraciones de emergencia climática, conforme a las disposiciones establecidas en la presente Ley y su reglamento.

VIII. Implementar, en coordinación con las instancias competentes, medidas preventivas orientadas a la protección de las comunidades y personas defensoras del territorio y el ambiente.

IX. Disponer la ejecución de las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas establezcan.

Artículo 9. Corresponden a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable las siguientes atribuciones:

I. Elaborar e instrumentar el Programa Estatal, promoviendo la participación social, escuchando y atendiendo a los sectores público, privado y a la sociedad en general.

II. Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento del Programa Estatal.

III. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación, adaptación y atención a pérdidas y daños ante el cambio climático, de acuerdo con el Programa Estatal en las siguientes materias:

a) Preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los bienes naturales de su competencia.
b) Seguridad alimentaria.

c) Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y

acuacultura. d) Educación.

e) Infraestructura.

f) Movilidad sustentable.

g) Ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

h) Ordenamiento ecológico.

i) Residuos sólidos de manejo especial.

j) Protección civil.

IV. Gestionar y administrar fondos locales para apoyar e implementar acciones en la materia.

V. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático.

VI. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente y sustentable, tanto público como privado.

VII. Elaborar en coordinación con la Secretaría de Gobierno un apéndice sobre vulnerabilidad climática que forme parte del Atlas de Riesgos Estatal.

VIII. Realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático.

IX. Elaborar e integrar, en colaboración con el INECC, la información de las categorías de fuentes emisoras, para su incorporación al Inventario Estatal de Emisiones.

X. Integrar el Inventario Estatal de Emisiones, conforme a los criterios e indicadores elaborados por la Federación en la materia.

XI. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones concertadas hacia el cumplimiento del Programa Estatal.

XII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y los demás ordenamientos que de ella se deriven.

XIII. Incorporar en sus instrumentos de política ambiental criterios de mitigación y adaptación al cambio climático.
XIV. Asegurar la implementación de la política estatal de cambio climático en el territorio del Estado.

XV. Integrar el Registro de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

XVI. Integrar el registro de refugios climáticos que se identifiquen dentro del territorio del Estado.

XVII. Incorporar la perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad en los instrumentos de su competencia, generando información que facilite la participación de los diversos sectores.

XVIII. Ejecutar las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas en la materia establezcan.

Artículo 10. Corresponde a la Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, la instauración del procedimiento de inspección y vigilancia, así como la atención de las denuncias ciudadanas por violaciones o incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, dándole curso legal en los términos de las legislaciones aplicables, imponiendo las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a un medio ambiente sano, así como emitir las sanciones correspondientes.

Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de Gobierno las siguientes atribuciones:

I. Fomentar la incorporación de principios, directrices y criterios sobre la política estatal de cambio climático en la normatividad del Estado.
II. Vigilar que las dependencias y entidades estatales garanticen la resiliencia climática de grupos en situación de vulnerabilidad.
III. Formular y proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado mecanismos de coordinación y medidas de atención ante los efectos del cambio climático.
IV. Elaborar, en coordinación con la Secretaría, un apéndice sobre vulnerabilidad climática que forme parte del Atlas de Riesgos Estatal. V. Coordinar estrategias para la atención integral de la movilidad humana vinculada a los efectos del cambio climático, en el marco de la política migratoria y de derechos humanos del Estado.
VI. Contribuir a la prevención de conflictos socioambientales derivados del cambio climático, así como coadyuvar con las autoridades competentes en la protección de personas defensoras del medio ambiente.
VII. Ejecutar las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas en la materia establezcan.

Artículo 12. Corresponden a la Secretaría de Salud las siguientes atribuciones:
I. Prevenir y atender enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático.

II. Integrar aspectos relacionados a la adaptación del cambio climático y reducción de la situación de vulnerabilidad climática en la política pública de protección a la salud.

III. Llevar a cabo programas para difundir información sobre los efectos del cambio climático en la salud y el desarrollo de la población.

IV. Coadyuvar en la prevención y el control de los factores relacionados con el cambio climático que puedan tener efectos en la salud humana.

V. Fortalecer el desarrollo de los servicios de infraestructura de salud para grupos en situación de vulnerabilidad al cambio climático.

VI. Elaborar estudios, dictámenes diagnósticos sobre los impactos a la salud de la población como consecuencia de los efectos del cambio climático.

VII. Ejecutar las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas en la materia establezcan.

Artículo 13. Corresponden a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial las siguientes atribuciones:

I. Integrar a las políticas y programas relativos a obras públicas y comunicaciones criterios de adaptación, mitigación y atención a pérdidas y daños, centrados en reducir la situación de vulnerabilidad y los riesgos generados por el cambio climático.

II. Mitigar la generación de gases y compuestos de efecto invernadero en las distintas fases del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura de la administración pública estatal.

III. Elaborar los estudios, proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios que deba considerar el Programa Estatal para la atención de futuros fenómenos hidrológicos y meteorológicos extremos, para propiciar la reubicación de asentamientos humanos y proteger la infraestructura estratégica en zonas de riesgo.

IV. Incorporar en los instrumentos de planeación y de gestión de la administración pública estatal los objetivos, criterios y acciones de atención al cambio climático.

V. Ejecutar las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas en la materia establezcan.

Artículo 14. Corresponden a la Secretaría de Turismo las siguientes atribuciones:

I. Integrar a la política de turismo del Estado los principios y metas establecidas en los instrumentos de política estatal de cambio climático.

II. Elaborar estudios, dictámenes e investigaciones sobre los efectos sociales y económicos en el sector turístico debido al cambio climático, para desarrollar políticas turísticas climáticas que superen los impactos negativos.

III. Generar estrategias de mitigación para las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero derivadas de los servicios turísticos que se presten en el Estado.

IV. Elaborar estudios y proyectos ejecutivos de inversión para la realización de programas públicos del sector turístico con un enfoque de sustentabilidad, implementando medidas de adaptación al cambio climático.

V. En coordinación con la Secretaría, identificar los destinos turísticos de máxima vulnerabilidad climática, a fin de integrar en las políticas turísticas medidas de adaptación que minimicen los riesgos, garantizando la sostenibilidad económica, social y ambiental.

VI. Formular e instrumentar programas turísticos para reducir las vulnerabilidades de la población en estas zonas, fomentando la participación colectiva y la sustentabilidad.

VII. Ejecutar las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas en la materia establezcan.

Artículo 15. Corresponden a la Secretaría de Bienestar las siguientes atribuciones:

I. Integrar en la política estatal de bienestar y prosperidad social criterios de adaptación y resiliencia ante el cambio climático.

II. Impulsar programas que fortalezcan las capacidades de adaptación de las comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.

III. Incorporar el enfoque de movilidad humana vinculada a los impactos del cambio climático en los programas de integración y bienestar social, para la integración de la población en situación de vulnerabilidad ante dichos fenómenos.

Artículo 16. Corresponden a la Secretaría de Hacienda las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y proponer a la persona titular del Ejecutivo proyectos normativos y disposiciones sobre asuntos fiscales, tributarios y financieros derivados de la Ley.

II. Etiquetar el presupuesto necesario para la atención a lo establecido en la Ley.

III. Asignar los recursos económicos necesarios para cumplir con las metas establecidas en la Ley.
IV. Promover y fortalecer los instrumentos económicos derivados de la Ley.
V. Participar en el proceso de planeación, elaboración, control y evaluación de la política estatal de cambio climático.
VI. Ejecutar las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas en la materia establezcan.

Artículo 17. Corresponden a la Secretaría de Educación las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y proponer a la persona titular del Ejecutivo políticas en materia educativa que deban llevarse a cabo en el Estado, con contenidos en materia de cambio climático.
II. Colaborar con las autoridades competentes para la ejecución de planes, programas y proyectos en materia de educación climática.
III. Desarrollar e implementar campañas educativas y de concienciación pública sobre el cambio climático, y para garantizar la participación pública en programas y el acceso a la información.
IV. Elaborar e implementar protocolos de actuación ante contingencias climáticas que garanticen la seguridad de la comunidad escolar y la continuidad del aprendizaje.
V. Ejecutar las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas en la materia establezcan.

Artículo 18. Corresponden a la Secretaría de Economía e Innovación las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y proponer a la persona titular del Ejecutivo mecanismos y estímulos económicos fiscales para la implementación de la Ley. II. Promover la atracción de inversiones en energías renovables, control de emisiones, protección de sumideros de carbono y reducción de desigualdad social.
III. Impulsar los instrumentos económicos contemplados en la Ley. IV. Promover el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas que apliquen los principios de la economía circular.
V. Divulgar la existencia, utilización y beneficios de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para la adaptación y mitigación del cambio climático.
VI. Realizar y coordinar análisis, diagnósticos, estudios e investigaciones

sobre los impactos del cambio climático en el desarrollo económico del Estado.

VII. Ejecutar las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas en la materia establezcan.

Artículo 19. Corresponden a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las siguientes atribuciones:

I. Incorporar criterios y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en los planes y programas estatales de desarrollo agrícola, pecuario y silvícola.

II. Generar programas para difundir información sobre los efectos del cambio climático en el sector, así como las medidas de adaptación y mitigación.

III. Fomentar y apoyar los programas de investigación sobre los impactos del cambio climático en las actividades agropecuarias y sílvicola, y divulgar las técnicas y sistemas que mejoren la producción sustentable en el sector.

IV. Promover prácticas sustentables que eliminen las quemas agrícolas. V. Integrar a sus programas incentivos para reconvertir las prácticas agrícolas en sustentables a partir de esquemas agroforestales y agrosilvopastoriles, socializando los beneficios de éstas.

VI. Colaborar con las autoridades federales y municipales competentes en la vigilancia y protección de especies de flora y fauna a las que las actividades agropecuarias coloquen en situación de vulnerabilidad al cambio climático.

VII. Apoyar a la Procuraduría en materia de agricultura en las inspecciones que se practiquen en materia de su competencia.

VIII. Ejecutar las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas en la materia establezcan.

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría de Pesca y Acuacultura las siguientes atribuciones:

I. Incorporar estrategias de adaptación y mitigación en el Programa Estatal de Pesca y Acuacultura.

II. Promover la investigación y el intercambio de información sobre impactos climáticos en las especies y hábitats de interés pesquero y acuícola, para fortalecer la toma de decisiones en el sector.

III. Fomentar el uso de prácticas de eficiencia energética y sustentabilidad en las actividades pesqueras y acuícolas.

IV. Ejecutar las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas en la materia establezcan.

Artículo 21. Corresponden al Instituto de Movilidad Sustentable las siguientes atribuciones:

I. Incorporar criterios y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en los Programas de Movilidad y Transporte.

II. Crear medidas para la transformación de la clase de equipos y combustibles, desincentivar el uso de automóviles particulares, fortalecer el transporte público y fomentar el uso de medios no motorizados como medio de transporte.

III. Definir sistemas de movilidad sustentable, eficientes, incluyentes y seguros para la mitigación de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, y la adaptación a los efectos del cambio climático.

IV. Priorizar el desarrollo de infraestructura segura y conectada para la movilidad peatonal y ciclista, e impulsar la transición hacia la electromovilidad en el transporte público y particular.

V. Ejecutar las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas en la materia establezcan.

Artículo 22. Corresponden a la Secretaría de las Mujeres las siguientes atribuciones:

I. Coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en el diseño e instrumentación de la Política Estatal de Cambio Climático.

II. Integrar a la política estatal de género consideraciones de impacto, adaptación y resiliencia climática.

III. Realizar investigaciones y generar información sobre el impacto diferenciado del cambio climático en las mujeres, identificando las vulnerabilidades y necesidades específicas de este grupo poblacional.

IV. Coadyuvar en garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones de mitigación, adaptación y atención a pérdidas y daños.

V. Impulsar los programas, proyectos y acciones climáticas para transversalizar la perspectiva de género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

VI. Impulsar medidas de adaptación que reduzcan la carga de trabajo de cuidados derivada de los impactos del cambio climático.

VII. Ejecutar las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas

en la materia establezcan.

Artículo 23. Corresponde a la Comisión Estatal de Energía de Baja California las siguientes atribuciones:

I. Promover y fomentar el uso, aprovechamiento racional y eficiente de la energía eléctrica, de los combustibles fósiles y de las fuentes de energías renovables, procurando la reducción de las desigualdades y la mejora en la calidad de vida de las personas.

II. Incentivar la instalación de proyectos de energía solar, eólica, geotérmica y otras fuentes renovables a través de mecanismos como subsidios, exenciones fiscales y programas de financiamiento.

III. Coadyuvar con la Secretaría y/u otros organismos públicos en la creación de mercados para la comercialización de energía renovable.

IV. Desarrollar e implementar estrategias para la descarbonización del sector energético, incluyendo la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables y la captura y almacenamiento de carbono.

V. Coadyuvar en la implementación de la política estatal de cambio climático.

VI. Promover la participación activa de los diferentes actores en la definición e implementación de política estatal de cambio climático y energía.

VII. Colaborar con dependencias federales, estatales y municipales para la implementación de la política estatal de cambio climático y energética.

VIII. Promover y apoyar la investigación, desarrollo e innovación en tecnologías de energía renovable y eficiente.

IX. Coadyuvar en el establecimiento de mecanismos de financiamiento para proyectos de investigación y desarrollo en materia de cambio climático y transición energética.

X. Ejecutar las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas en la materia establezcan.

Artículo 24. Corresponde a la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua las siguientes atribuciones:

I. Integrar en la política hídrica estatal criterios y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático para garantizar la seguridad hídrica y el derecho humano al agua ante escenarios de sequía y estrés hídrico.

II. Vincular el desarrollo del Estado en materia hídrica con la política estatal de cambio climático referida en la presente Ley.

III. Modernizar la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento de agua a fin de que puedan resistir los impactos del cambio

climático.

IV. Promover, coordinar, concertar, investigar y desarrollar, dentro de sus competencias, tecnologías relacionadas con la aplicación de la presente Ley.

V. Ejecutar las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas en la materia establezcan.

Artículo 25. Corresponde al Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California las siguientes atribuciones:

I. Garantizar que las políticas de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y posgrado aborden el cambio climático, la mitigación y la adaptación.

II. Formular programas, proyectos y acciones para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el posgrado relacionados con cambio climático.

III. Coordinar y evaluar en la política estatal de cambio climático, proyectos, acciones derivadas de esta la concertación para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el posgrado.

IV. Coadyuvar con la Secretaría y/o la Comisión Intersecretarial en la elaboración y ejecución de programas de difusión e información de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, y la innovación.

V. Fomentar y fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el posgrado que sean necesarios en materia de cambio climático, y promover las acciones concertadas que se requieran para la aplicación de la presente Ley.

VI. Apoyar técnica y económicamente cuando así proceda y existan recursos para tal fin, los trabajos y proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en materia de cambio climático.

VII. Ejecutar las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas en la materia establezcan.

CAPÍTULO II

AUTORIDADES MUNICIPALES

Artículo 26. Corresponde a los municipios las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política climática municipal en concordancia con la política nacional y estatal en congruencia con el Programa Estatal y la Contribución Determinada a Nivel Nacional.

II. Implementar acciones de mitigación, adaptación y atención a pérdidas y

daños en la presentación de servicios públicos municipales, asegurando la transversalidad en las siguientes materias:

a) Prestación del servicio de agua potable y saneamiento;

b) Ordenamiento ecológico local, desarrollo urbano y ordenamiento territorial; c) Protección al medio ambiente y bienes naturales;

d) Protección civil;

e) Manejo de residuos sólidos urbanos y fomento a la economía circular;
f) Promover acciones que fomenten la movilidad activa, micromovilidad y electromovilidad, así como la gestión del espacio público para desincentivar el uso del automóvil particular

g) Otros servicios públicos municipales que contribuyan a la generación de emisiones a la atmósfera o sean relevantes para la resiliencia de la población y los ecosistemas.

III. Realizar programas y campañas de educación e información sobre cambio climático para sensibilizar a la población;

IV. Fortalecer las capacidades institucionales, atender la mitigación y adaptación al cambio climático;

V. Coadyuvar con el Estado en la instrumentación del Programa Estatal;

VI. Gestionar y administrar recursos para ejecutar acciones de adaptación y mitigación ante el cambio climático;

VII. Integrar anualmente un informe de las emisiones de las fuentes de su competencia conforme a los criterios o lineamientos técnicos que le proporcione el Estado;

VIII. Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley, sus disposiciones reglamentarias y los demás ordenamientos que deriven de ella; y

IX. Ejecutar las demás atribuciones que esta Ley y otras disposiciones jurídicas en la materia establezcan.

CAPÍTULO III

COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 27. La Comisión Intersecretarial tiene por objeto promover y coordinar la política estatal de cambio climático entre las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como la coordinación, seguimiento y evaluación del Programa Estatal.

Artículo 28. La Comisión Intersecretarial estará conformada por las personas titulares del Poder Ejecutivo y dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal de la siguiente forma:

I. **Preside**:
a) Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

II. **Presidencia Ejecutiva**:
a) Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. III. **Secretariado Técnico**:

a) La persona designada por la Presidencia ejecutiva para ese encargo. **IV. Vocales**:

a) Secretaría General de Gobierno;

b) Secretaría de Salud;

c) Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial; d) Secretaría de Turismo;

e) Secretaría de Hacienda;

f) Secretaría de Educación;

g) Secretaría de Economía e Innovación;

h) Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;

i) Secretaría de Pesca y Acuacultura;

j) Secretaría de Bienestar;

k) Secretaría de las Mujeres;

l) Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua; m) Coordinación Estatal de Protección Civil;

n) Instituto de Movilidad Sustentable;

o) Comisión Estatal de Energía de Baja California;

p) Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica;

q) La o el Presidente de la Comisión del Congreso del Estado, responsable en materia ambiental, cambio climático o equivalente.

La Comisión podrá invitar a sus sesiones a representantes de la federación, de los municipios, del sector académico, social y privado, con voz pero sin voto, cuando los asuntos a tratar lo permitan.

Lo relativo a las facultades de los integrantes, las sesiones y demás temas relativos a la organización y funcionamiento de la Comisión serán establecidos en el Reglamento que para tales efectos se elabore y publique en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Artículo 29. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Impulsar en coordinación con la Secretaría, la elaboración, evaluación y seguimiento del Programa Estatal, con la finalidad de establecer las acciones tendientes a la adaptación, mitigación y atención a pérdidas y daños en materia de cambio climático, considerando la vulnerabilidad del Estado;

II. Formular, impulsar y coordinar políticas, estrategias y metas estatales para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático y su incorporación en los programas institucionales, relativas al cumplimiento de esta Ley;

III. Coordinar acciones de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, enfocadas a la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y a la adaptación al cambio climático, en el ámbito de sus respectivas competencias;

IV. Garantizar la coordinación entre leyes, programas, medidas y acciones de adaptación, mitigación y atención a pérdidas y daños en materia de cambio climático por parte de las dependencias del Gobierno del Estado, así como con los programas del sector federal;

V. Formular recomendaciones para el fortalecimiento de las políticas y acciones de mitigación, adaptación y atención a pérdidas y daños;

VI. Definir, coordinar e impulsar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos y compromisos contenidos en el Programa Estatal, así como en los instrumentos derivados de convenciones nacionales e internacionales en la materia y que competen al Estado;

VII. Promover el fortalecimiento de los programas de educación y comunicación a nivel estatal y municipal, incorporando criterios de cambio climático; VIII. Fomentar la participación de los sectores público y privado en la instrumentación del Programa Estatal y en la coordinación y transversalidad de políticas, planes, programas y proyectos prioritarios de la administración pública estatal;

IX. Diseñar, coordinar y fomentar estrategias de difusión en los sectores privado y social en materia de cambio climático;

X. Promover el desarrollo de estudios y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico con relación al cambio climático;

XI. Promover en los sectores privado y social, la realización de proyectos para la reducción y captura de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;

XII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, las declaratorias de emergencia climática conforme a las disposiciones contenidas en la presente Ley y las demás que deriven de la presente;

XIII. Apoyar en el desarrollo, implementación y evaluación de medidas y acciones contenidas en las declaratorias de emergencia climática, con el fin de proteger la vida, los ecosistemas y la biodiversidad que se encuentra en riesgo, o haya sufrido algún daño;

XIV. Coadyuvar con la Secretaría en la integración, elaboración y actualización del Inventario;

XV. Promover el fortalecimiento de las capacidades administrativas, humanas y de equipamiento en los órdenes estatal y municipal, para implementar mecanismos de medición, reporte y verificación, así como de monitoreo y evaluación en las políticas públicas, programas y proyectos de mitigación, adaptación y atención a pérdidas y daños ante el cambio climático;

XVI. Elaborar, en coordinación con la Secretaría, el presupuesto para realizar acciones de mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, y el correspondiente a la adaptación para reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático;

XVII. Emitir su Reglamento Interno y un programa anual de trabajo, para el cumplimiento de su propósito y el objeto de la presente Ley; y

XVIII. Las demás que establezcan las diferentes disposiciones aplicables.

CAPÍTULO IV

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Artículo 30. El Estado, en coordinación con la federación y los municipios implementará y ejecutará la política estatal de cambio climático, asegurando la coherencia con la Política Nacional.

Artículo 31. La Secretaría se coordinará con las demás dependencias y entidades del Estado para que desarrollen las medidas y acciones necesarias para la implementación de las atribuciones que les correspondan de conformidad con lo establecido en la presente Ley así como de los acuerdos que deriven del trabajo de la Comisión Intersecretarial.

Artículo 32. La Secretaría podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, colaboración o concertación con los municipios, la sociedad civil organizada, el sector privado y la academia a fin de cumplir con el objeto de la presente Ley de manera coordinada.

Artículo 33. La Secretaría, la Comisión Intersecretarial y el Consejo se coordinarán para atender situaciones de peligro o riesgo inminente para la salud de las personas o los ecosistemas como consecuencia de los efectos adversos del cambio climático.

TÍTULO TERCERO

POLÍTICA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

CAPÍTULO I

ADAPTACIÓN

Artículo 34. La política estatal de adaptación ante el cambio climático tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de las personas, comunidades, y los ecosistemas naturales, urbanos y agropecuarios, frente a los efectos del cambio climático, a través de soluciones basadas en la naturaleza, así como los conocimientos tradicionales, considerando las distintas características geoclimáticas y de los sectores productivos y sociales presentes en el Estado.

Artículo 35. La política estatal de adaptación frente al cambio climático considerará dentro de su diseño las metas siguientes:

I. Garantizar que las personas, en particular quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad por pobreza, género o cualquier otra circunstancia, tengan acceso a servicios urbanos básicos, a bienes naturales y servicios ecosistémicos, a tecnología y a servicios

financieros, de forma que se aumente su resiliencia.

II. Promover prácticas agrícolas sostenibles y resilientes a los efectos adversos del cambio climático.

III. Mantener la diversidad genética de semillas, plantas y animales, con estrategias como una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel regional y municipal, así como la promoción del acceso justo y equitativo a los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos.

IV. Diseñar un sistema de datos, seguimiento y atención de enfermedades transmitidas por vectores cuya proliferación, comportamiento y distribución se ve afectada por fenómenos asociados al cambio climático, reforzando la capacidad de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de estos para proteger la salud de las personas.

V. Buscar que todas las personas adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la equidad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

VI. Mejorar y aumentar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para promover el aumento de la resiliencia de la población.

VII. Gestionar el uso y la distribución de los bienes naturales hídricos con criterios de asignación basados en necesidades colectivas.

VIII. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos,
los lagos y los demás ecosistemas costeros y marinos en el territorio del Estado.

IX. Aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas, y el acceso a energía asequible para todas las personas.

X. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo dignos, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas, así como las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.

XI. Reducir la proporción de jóvenes que no cuentan con empleo y no cursan estudios ni reciben capacitación.

XII. Diseñar e implementar políticas encaminadas a promover el turismo

sostenible que genere puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

XIII. Desarrollar y modernizar la infraestructura estratégica hidráulica, de comunicaciones, transporte y otros en el ámbito de competencia estatal y municipal, asegurando que sea sostenible, resiliente y de calidad.

XIV. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación, buscando la diversificación industrial y el valor agregado a los productos locales.

XV. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de edad, género, discapacidad, origen étnico, religión, situación económica u otra condición.

XVI. Buscar la igualdad de oportunidades de forma progresiva mediante la adopción de políticas fiscales, salariales y sociales.

XVII. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias, planes y programas que correspondan a todos los sectores.

XVIII. Prevenir y reducir la contaminación de cuerpos de agua de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluida la polución por nutrientes.

XIX. Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas acuáticos para evitar efectos adversos importantes, fortaleciendo la resiliencia y adoptando medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los cuerpos de agua.

XX. Fomentar un aprovechamiento pesquero sustentable, basado en criterios científicos y sostenibles, así como promover la vigilancia y las buenas prácticas pesqueras, a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas.

XXI. Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas de agua dulce y sus servicios. XXII. Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un territorio con efecto neutro en la degradación de las tierras.

XXIII. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales y detener la pérdida de biodiversidad.

XXIV. Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades reales de la población,

en todas las dependencias y organismos.

XXV. Impulsar el aumento de la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático desde los instrumentos estatales de ordenamiento territorial y protección civil.

XXVI. Reducir el riesgo derivado de los daños y las pérdidas por fenómenos climáticos extremos y de evolución lenta, considerando escenarios actuales y futuros.

XXVII. Fomentar soluciones basadas en las comunidades, fortaleciendo las capacidades locales, los conocimientos tradicionales y las prácticas territoriales para la gestión adaptativa, la reducción de riesgos y la conservación de ecosistemas;

XXVIII. Coadyuvar en el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana multirriesgo y las capacidades para pronosticar escenarios climáticos actuales y futuros, priorizando la protección de grupos en situación de vulnerabilidad;

XXIX. Impulsar soluciones climáticas basadas en el océano, fortaleciendo la investigación y el conocimiento para favorecer la resiliencia de los ecosistemas marinos y costeros del Estado ante el cambio climático;

XXX. Integrar las soluciones basadas en la naturaleza en los instrumentos de ordenamiento territorial y ecológico, así como en la planificación sectorial, como estrategia de adaptación ante los desafíos socioambientales provocados por el cambio climático; y

XXXI. Fortalecer los esquemas de conservación, restauración y manejo sostenible de los reservorios de carbono verde y azul, como estrategia de adaptación y provisión de servicios ecosistémicos.

CAPÍTULO II

MITIGACIÓN

Artículo 36. La política estatal de mitigación de cambio climático tiene como objetivo mejorar el potencial de reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto
invernadero derivadas de la actividad humana, así como el aumento de las absorciones de carbono en los sumideros.

Artículo 37. La política estatal de mitigación al cambio climático considerará dentro de su diseño las metas siguientes:

I. Promover la transición justa hacia una economía baja en carbono, mediante

el fomento de la eficiencia energética y el uso creciente de fuentes renovables de energía, asegurando el acceso equitativo y asequible para todos los sectores sociales;

II. Establecer una trayectoria de descarbonización para alcanzar la neutralidad de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para mediados de siglo, en concordancia con los compromisos nacionales;

III. La sostenibilidad de los sistemas de producción agropecuaria evitando emisiones a la atmósfera.

IV. Reducir el impacto ambiental negativo prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de residuos.

V. Promover la reducción del consumo de los combustibles fósiles;

VI. Fomentar la generación energética en forma de calor o electricidad a partir de fuentes renovables o libres de emisiones de carbono, así como prácticas de eficiencia energética;

VII. Incrementar la disponibilidad del transporte público masivo y transporte público eléctrico, la intermodalidad o sistemas de cero emisiones;

VIII. Incrementar la movilidad multimodal baja en carbono, favoreciendo la movilidad activa, que integre redes en los ámbitos urbano y suburbano, público y privado;

IX. Promover que las grandes y medianas empresas presenten informes sobre la adopción de prácticas sostenibles, particularmente la disminución de emisiones y de generación de residuos.

X. Implementar acciones para reducir las emisiones del sector transporte público y privado.

XI. Promover ante las instancias competentes la implementación de medidas para la reducción de emisiones del sector energético.

XII. Promover la alineación de programas para detener y revrtir la deforestación y la degradación de ecosistemas, incluyendo soluciones basadas en la naturaleza y soluciones climáticas basadas en el océano, para aumentar los sumideros de carbono verde y azul.

XIII. Procurar una gestión financiera pública verde.

CAPÍTULO III

MEDIDAS Y ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE PÉRDIDAS Y DAÑOS

Artículo 38. Por pérdidas y daños se entiende aquellos impactos adversos derivados de fenómenos climáticos extremos o de evolución lenta asociados al

cambio climático que no han podido ser evitados ni gestionados mediante medidas de mitigación o adaptación o que han excedido los límites de adaptación determinados. Estos impactos pueden ser de carácter económico o no económico, tangibles o intangibles, y afectan tanto a los sistemas humanos como naturales, así como a las dimensiones sociales, culturales y humanas de las comunidades.

Artículo 39. Las acciones en materia de pérdidas y daños deberán incorporarse en la planeación estatal de acción climática y establecerán objetivos, metas y medidas para la atención de los impactos negativos del cambio climático sobre la población, los ecosistemas, los recursos naturales y las especies, promoviendo medidas adaptativas o, en su caso, restaurativas o resarcitorias.

Las políticas, programas y acciones previstas en la planeación estatal deberán articularse con los instrumentos de la Política Nacional de Cambio Climático, la Contribución Determinada a nivel Nacional y se formularán de manera concurrente con los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 40. La determinación del nivel de daño o la identificación de la existencia de una pérdida implicará considerar:

I. La situación imperante antes del evento climático detonante;

II. Los límites de adaptación correspondientes; y

III. Los elementos ecológicos, sociales, económicos y culturales relacionados con la afectación.

La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, las dependencias competentes y los ayuntamientos, establecerá metodologías e indicadores para evaluar pérdidas, daños y límites de adaptación en el territorio estatal.

Artículo 41. Las acciones en materia de pérdidas y daños que se integren a los instrumentos de planeación estatal y municipal deberán establecer objetivos, metas y prioridades para atender los impactos negativos del cambio climático sobre:

I. La población;

II. Los ecosistemas;

III. Recursos naturales específicos;

IV. Especies y biodiversidad;

V. Infraestructura pública, privada y estratégica;
VI. Medios de vida comunitarios; y

VII. La movilidad humana inducida por el clima.

Artículo 42. Las acciones estatales en materia de pérdidas y daños privilegiarán la cooperación:

I. Nacional;

II. Interestatal;

III. Municipal; e

IV. Internacional, cuando proceda.

Su objetivo será la coordinación, prevención y atención conjunta de los impactos derivados del cambio climático, en el marco de los derechos, responsabilidades y medios de defensa previstos en la legislación aplicable.

Artículo 43. La implementación de acciones en materia de pérdidas y daños deberá asegurar:

I. Transparencia en la asignación y ejercicio de recursos;

II. Participación informada de comunidades y sectores afectados;

III. Integración de pueblos y comunidades indígenas, mujeres, juventudes y personas en situación de vulnerabilidad en los procesos de decisión;

IV. Sistemas de información y registro estatal de pérdidas y daños; y

V. Mecanismos de evaluación continua y mejora de las acciones implementadas.

CAPÍTULO IV

SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTALES

Artículo 44. El Poder Ejecutivo del Estado y los municipios establecen las salvaguardas socioambientales en materia de cambio climático como las medidas precautorias que anticipan, minimizan y evitan los impactos negativos en las personas o comunidades en situación de vulnerabilidad y a los

ecosistemas, que puedan ser causados por:

I. Los efectos adversos del cambio climático, o

II. Las acciones, programas o proyectos del gobierno o de particulares aún cuando tengan como finalidad la adaptación o mitigación al cambio climático.

Artículo 45. Las estrategias que podrán implementarse como salvaguardas socioambientales, de manera enunciativa más no limitativa, son las siguientes:
I. Llevar a cabo evaluaciones sociales y ambientales para identificar, evitar, y mitigar los impactos adversos de las acciones, programas o proyectos.

II. Realizar consultas asegurando la participación y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en proyectos que los afecten, respetando sus derechos y culturas.

III. Asegurar que las personas desplazadas por circunstancias atribuibles a los efectos adversos del cambio climático, reciban apoyo para restaurar sus condiciones de vida.

IV. Asegurar que las personas o comunidades desplazadas por proyectos de desarrollo reciban compensaciones justas y apoyo para mejorar o al menos restaurar sus condiciones de vida.

V. Respetar los conocimientos y derechos de los pueblos y comunidades locales en la implementación de acciones, programas o proyectos.

VI. Conservar la bioculturalidad y los ecosistemas naturales.

VII. Asegurar que los beneficios derivados del uso de recursos genéticos se compartan de manera justa y equitativa con las comunidades locales.

VIII. Asegurar que las comunidades locales tengan voz y voto en la planificación y ejecución de acciones, programas o proyectos que puedan afectarles, respetando el principio de consentimiento libre, previo e informado.

IX. Asegurar que las empresas identifiquen, prevengan, y mitiguen los impactos negativos sobre los derechos humanos en todas sus operaciones.

TÍTULO CUARTO

INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 46. Son instrumentos de la política estatal de cambio climático los siguientes:

I. **Instrumentos de planeación**:

a) El Programa Estatal.

b) Las políticas climáticas municipales.

c) El Atlas de Riesgos Estatal.

d) La Estrategia Estatal de Biodiversidad.

II. **Instrumentos de transparencia y seguimiento**:

a) Inventario Estatal de Emisiones.

b) Registro Estatal de Emisiones.

c) Sistema Estatal de Información Ambiental.

III. **Instrumentos económicos**:

a) Sistema Estatal de Compensación de Emisiones.

b) Fondo Ambiental.

IV. Instrumentos de gestión del riesgo climático:

a) Declaratoria de emergencia climática.
b) Refugios climáticos.

CAPÍTULO II

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

SECCIÓN PRIMERA

PROGRAMA ESTATAL DE ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 47. El Programa Estatal constituye el instrumento rector de la política estatal de cambio climático en el corto, mediano y largo plazo para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones.

Artículo 48. La Secretaría elaborará el Programa Estatal con la participación de instituciones académicas y de investigación, con apoyo y asesoría del INECC, la opinión del Consejo y la aprobación de la Comisión Intersecretarial; y lo publicará en el Periódico Oficial del Estado, de acuerdo al procedimiento establecido por la Secretaría de Gobierno.

Artículo 49. El Programa Estatal deberá emitirse en un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir del inicio de cada administración de gobierno del Estado. Los objetivos, acciones y metas de mitigación y adaptación que se incluyan en los programas sectoriales, el Programa Estatal, así como en las políticas climáticas municipales, estarán alineados con la política nacional de cambio climático y lo establecido en esta Ley.

SECCIÓN SEGUNDA

POLÍTICA CLIMÁTICA MUNICIPAL

Artículo 50. Las políticas climáticas municipales son las estrategias, objetivos y acciones, que los municipios integrarán en su Plan Municipal de Desarrollo a fin de alinear esfuerzos con el Estado y la Federación desde su ámbito de competencias para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.

Artículo 51. La Secretaría establecerá lineamientos generales que sirvan como base a los municipios para diseñar su política climática a partir de los cuales los municipios podrán integrar a sus planes municipales de desarrollo lo siguiente:

I. Objetivos y metas de mitigación y adaptación al cambio

climático; II. Proyectos y acciones vinculados a las anteriores; y

III. Los indicadores a partir de los cuales evaluarán su implementación.

Artículo 52. La Secretaría asesorará a los municipios que lo soliciten, en la formulación, ejecución y evaluación de sus políticas climáticas municipales.

CAPÍTULO III

INSTRUMENTOS DE TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO

SECCIÓN PRIMERA

INVENTARIO ESTATAL DE EMISIONES

Artículo 53. El Inventario Estatal de Emisiones es el instrumento que contiene la estimación de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y contaminantes criterio, generados por las fuentes de competencia estatal y municipal, así como la absorción por los sumideros que se ubican dentro del territorio del Estado de Baja California.

Artículo 54. El Inventario Estatal de Emisiones constituye un instrumento de apoyo a la planeación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de cambio climático, calidad del aire y desarrollo sustentable en el Estado, y deberá vincularse con los instrumentos de planeación nacionales y estatales en la materia.

Artículo 55. El Inventario Estatal de Emisiones será actualizado al menos cada cinco años, conforme a las metodologías y lineamientos establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y demás disposiciones aplicables.

Artículo 56. Se consideran como contaminantes criterio, los siguientes:

I. Ozono (O3);
II. Dióxido de azufre (SO2);
III. Monóxido de carbono (CO);
IV. Dióxido de nitrógeno (NO2);
V. Partículas en suspensión (PM10, PM2.5);
VI. Plomo (Pb); y
VII. Los que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal dé a conocer.

Artículo 57. Se consideran como gases y compuestos de efecto invernadero, los siguientes:

I. Bióxido de carbono; Metano;
II. Óxido nitroso;
III. Carbono negro u hollín;
IV. Clorofluorocarbonos;
V. Hidroclorofluorocarbonos;
VI. Hidrofluorocarbonos;
VII. Perfluorocarbonos; Hexafluoruro de azufre;

VIII. Trifluoruro de nitrógeno;
IX. Éteres halogenados;
X. Halocarbonos;
XI. Mezclas de los anteriores, y
XII. Los gases y compuestos de efecto invernadero que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático determine como tales y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal dé a conocer como sujetos a reporte.

Artículo 58. El Inventario Estatal será de acceso público y deberá difundirse a través de los medios electrónicos oficiales del Gobierno del Estado, garantizando la transparencia y disponibilidad de la información a la sociedad, conforme a lo establecido en la presente Ley y el Acuerdo de Escazú.

Artículo 59. La Secretaría, elaborará y actualizará periódicamente el Inventario Estatal, de acuerdo con los lineamientos y metodologías elaborados por la Federación en la materia.

La Secretaría pondrá a disposición de la Federación los datos, documentos y registros del Inventario en el marco de los procedimientos adoptados a nivel nacional para la integración y reporte de las comunicaciones nacionales correspondientes.

Artículo 60. Para la estimación de las emisiones del Inventario Estatal, la Secretaría, con el apoyo de los Ayuntamientos, obtendrá la información de las fuentes de competencia estatal y municipal que se ubican dentro del territorio del
Estado de Baja California, de establecimientos o instalaciones, públicas o privadas, y de fuentes móviles, fijas o semifijas, ordenadas en los siguientes sectores:

I. Energía: La generación de energía y el consumo de combustible en la industria, transporte, comercios y servicios;
II. Procesos industriales: La industria minera, química, metálica, electrónica, de papel y alimentaria;
III. Agricultura: Quema de residuos agrícolas, fermentación entérica, manejo de estiércol y suelos agrícolas;
IV. Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura: Conversión de bosques a praderas, cambios en los almacenes de carbono y cambios en la biomasa forestal y leñosa; y
V. Desechos: Disposición final de residuos sólidos urbanos o su incineración y

plantas de tratamiento de aguas residuales, domésticas e industriales.

Artículo 61. Las autoridades municipales proporcionarán a la Secretaría los datos, documentos y registros relativos a las emisiones de fuentes de su competencia, conforme a los formatos, las metodologías y los procedimientos que se determinen en las disposiciones jurídicas que al efecto se expidan.

SECCIÓN SEGUNDA

REGISTRO DE EMISIONES

Artículo 62. Los responsables de las fuentes emisoras de competencia estatal y municipal estarán obligados a reportar a la Secretaría y a los Ayuntamientos correspondientes, sus emisiones de gases de efecto invernadero regulados por la presente Ley.

Artículo 63. Con los reportes de emisiones, la Secretaría, deberá integrar el Registro de Emisiones generadas por las fuentes de su competencia que se identifiquen como sujetas a reporte.

Artículo 64. Los gases o compuestos de efecto invernadero sujetos a reporte en los términos de la presente Ley, son:

XIII. Bióxido de carbono; Metano;
XIV. Óxido nitroso;
XV. Carbono negro u hollín;
XVI. Clorofluorocarbonos;
XVII. Hidroclorofluorocarbonos;
XVIII. Hidrofluorocarbonos;
XIX. Perfluorocarbonos; Hexafluoruro de azufre;
XX. Trifluoruro de nitrógeno;
XXI. Éteres halogenados;
XXII. Halocarbonos;
XXIII. Mezclas de los anteriores, y
XXIV. Los gases y compuestos de efecto invernadero que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático determine como tales y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal dé a conocer como sujetos a reporte.

Artículo 65. Para la integración del Registro la Secretaría determinará en los

lineamientos respectivos lo siguiente:

I. Los sectores, subsectores y actividades sujetas a reporte.

II. Los gases y compuestos de efecto invernadero que deberán reportarse.

III. Los umbrales a partir de los cuales los establecimientos sujetos a reporte de competencia estatal deberán presentar el reporte de sus emisiones.

IV. La metodología de cálculo para las emisiones directas e indirectas que deberán ser reportadas.

Artículo 66. Las personas físicas y morales responsables de las fuentes sujetas a reporte están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios sobre sus emisiones directas e indirectas para la integración del Registro.

CAPÍTULO IV

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE MERCADO

SECCIÓN PRIMERA

SISTEMA ESTATAL DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES

Artículo 67. El Sistema Estatal de Compensación de Emisiones se conformará por la Secretaría con la finalidad de promover el ejercicio y la transparencia de la comercialización de créditos de carbono en los mercados voluntarios y los mercados regulados de carbono.

Artículo 68. El Sistema Estatal de Compensación de Emisiones se integrará por lo siguiente:

I. El Registro de proyectos de captura de carbono que cuenten con certificado emitido por un organismo autorizado por la Secretaría.

II. El Registro de establecimientos o empresas que pretendan adquirir créditos de carbono en el Estado, incluyendo las que generen emisiones de competencia
federal, estatal o municipal, así como aquellas que pertenezcan al mercado internacional.

III. El Registro de prestadores de servicio que cuenten con autorización por parte de la Secretaría para fungir como intermediarios en los acuerdos de comercialización de créditos de carbono generados en el Estado.

IV. Los lineamientos generales a los que deberán sujetarse las transacciones comerciales de créditos de carbono.

CAPÍTULO V

SECCIÓN PRIMERA

EMERGENCIA CLIMÁTICA

Artículo 69. La emergencia climática es la situación en la que se identifica un impacto adverso significativo atribuible al cambio climático, que afecta a personas, comunidades, ecosistemas, bienes públicos, infraestructura o sistemas socioeconómicos, y que requiere la implementación coordinada de acciones inmediatas y urgentes para:

I. La mitigación de riesgos climáticos;

II. La adaptación y protección de personas, comunidades y

ecosistemas; III. La restauración ambiental; y

IV. El fortalecimiento de la resiliencia territorial.

La declaratoria de emergencia climática es distinta e independiente de la declaratoria de emergencia emitida por la Coordinación Estatal de Protección Civil o las unidades de protección civil municipales, al incorporar la dimensión ambiental y climática de los impactos, así como la atención a los efectos sobre los ecosistemas y los medios de vida relacionados.

Artículo 70. La atención de una emergencia climática se sujetará al principio de gradualidad y coordinación interinstitucional.

Las autoridades municipales actuarán en primera instancia a través de sus unidades de protección civil y ambientales.

Cuando la magnitud del evento exceda su capacidad, las autoridades estatales asumirán la coordinación conforme a su legislación.

Si la emergencia supera también este nivel, se coordinará con las autoridades federales competentes, en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 71. Conforme al principio de gradualidad y coordinación interinstitucional, la declaratoria de emergencia climática determinará el ámbito principal de actuación conforme a la naturaleza de los impactos observados:

I. Cuando los efectos del cambio climático afecten predominantemente a las personas, asentamientos humanos, infraestructura o actividades productivas, la coordinación de las acciones corresponderá a la Coordinación Estatal de Protección Civil, con el apoyo técnico y ambiental de la Secretaría y las demás autoridades competentes;

II. Cuando los impactos recaigan principalmente sobre los ecosistemas, la biodiversidad o los servicios ambientales, la conducción corresponderá a la Secretaría, en coordinación con las autoridades federales y municipales en materia ambiental y de protección civil; y

III. En situaciones mixtas, las acciones se realizarán de manera coordinada entre ambos sistemas, priorizando medidas integrales que reduzcan la vulnerabilidad, restauren los ecosistemas afectados y fortalezcan la resiliencia de las comunidades.

La autoridad que emita la declaratoria deberá establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, así como los instrumentos financieros, técnicos y sociales necesarios para la atención integral de la emergencia climática, conforme a los principios de adaptación, prevención y restauración.

Artículo 72. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado tendrá la facultad de emitir la declaratoria de emergencia climática cuando, con base en la información científica, técnica, ambiental o de protección civil disponible, se identifique la existencia de un impacto adverso significativo atribuible al cambio climático que requiera la implementación inmediata de acciones urgentes de mitigación, adaptación, restauración ambiental o protección a la población y a los ecosistemas.

SECCIÓN SEGUNDA

REFUGIOS CLIMÁTICOS

Artículo 73. Los refugios climáticos son aquellas áreas, zonas o edificaciones que, por sus condiciones geográficas, climáticas, de infraestructura o de gestión, brindan resguardo a la biodiversidad, a los ecosistemas o a las personas frente a los impactos adversos del cambio climático.

Artículo 74. Los refugios climáticos no estarán sujetos a la administración directa del gobierno estatal o municipal, salvo que correspondan a áreas naturales protegidas o bienes públicos o coincidan con infraestructura pública.

Artículo 75. La Secretaría integrará, administrará y mantendrá actualizado un Registro Estatal de Refugios Climáticos, el cual deberá mantenerse a disposición del Centro Nacional de Prevención de Desastres y del público en general.

Artículo 76. El Registro Estatal de Refugios Climáticos tendrá por objeto identificar, documentar y poner a disposición información verificable sobre los espacios, públicos o privados, que puedan brindar protección temporal a personas, comunidades, ecosistemas o infraestructura estratégica ante eventos climáticos extremos asociados al cambio climático.

Artículo 77. El Registro Estatal de Refugios Climáticos deberá incluir, al menos, la siguiente información:

I. La localización geográfica precisa, accesibilidad y tipología de cada refugio climático;

II. Los lineamientos técnicos, criterios de seguridad, capacidades y estándares mínimos que dicho refugio cumple, conforme a las disposiciones federales, estatales y municipales aplicables;

III. La identificación de las personas, instituciones o dependencias responsables de su administración, operación, supervisión y gestión; y

IV. Las acciones de gestión, conservación, mantenimiento y, en su caso, adecuación o mejora realizadas para garantizar su funcionalidad ante eventos climáticos extremos.

Artículo 78. La Secretaría deberá coordinarse con los ayuntamientos, dependencias estatales competentes, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y propietarios de refugios climáticos privados, para la actualización periódica del Registro Estatal de Refugios Climáticos y la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 79. El Registro Estatal de Refugios Climáticos deberá actualizarse al menos una vez al año, o cuando ocurra un evento climático que modifique la funcionalidad, capacidad o condiciones de alguno de los refugios climáticos registrados.

TÍTULO QUINTO

DERECHOS DE ACCESO

CAPÍTULO I

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 80. Toda persona tiene derecho al acceso a la información climática a través de indicadores de fuerza, presión, estado, exposición, efecto y acciones, que de manera objetiva presenten la situación del Estado y sus municipios en materia de cambio climático, y a acceder a instrumentos oportunos de participación ciudadana.

Artículo 81. El Estado y los municipios deberán promover y garantizar la participación corresponsable de la ciudadanía para la toma de decisiones en el desarrollo, implementación y verificación del Programa Estatal, como también de las políticas climáticas municipales, así como en las medidas individuales y colectivas de adaptación y mitigación del cambio climático.

CAPÍTULO II

CONSEJO ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 82. El Consejo, es el órgano de consulta de la Comisión Intersecretarial y se integrará por personas representantes de los sectores social, privado y académico, con experiencia en materia ambiental y de cambio climático.

Artículo 83. Las dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial propondrán a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado las personas que consideren cuentan con el perfil adecuado para integrar el Consejo, y esta hará las designaciones correspondientes buscando el equilibrio entre los sectores e intereses, bajo el principio de paridad de género.

Artículo 84. El Consejo tendrá una presidencia y una secretaría técnica, que recaerá en personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría.

Artículo 85. Las personas integrantes del Consejo ejercerán su encargo de manera honorífica y a título personal, con independencia de la institución, empresa u organización de la que formen parte o en la cual presten sus

servicios.

Artículo 86. El Consejo sesionará de manera ordinaria dos veces por año o cada vez que la Comisión Intersecretarial requiera su opinión. El quórum legal para las reuniones del Consejo se integrará con la mitad más uno de sus miembros.

Los acuerdos que se adopten en el seno del Consejo serán por mayoría simple de los presentes.

Artículo 87. El Consejo tendrá las funciones siguientes:

I. Asesorar a la Comisión Intersecretarial en los asuntos que esta le consulte.
II. Recomendar a la Comisión Intersecretarial realizar estudios y adoptar políticas que se relacionen con los sectores que representa y que tengan por objeto cumplir lo establecido en esta Ley.

III. Promover la participación social, informada y responsable, a través de los procesos participativos que determine en coordinación con la Comisión Intersecretarial.

IV. Dar seguimiento al Programa Estatal y las políticas climáticas municipales.

V. Presentar a la Comisión Intersecretarial un informe anual de sus actividades, a más tardar en el mes de febrero de cada año.

VI. Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno.

Artículo 88. La organización, estructura y el funcionamiento del Consejo de Cambio Climático se determinarán en el Reglamento que para los fines se expida.

CAPÍTULO III

JUSTICIA CLIMÁTICA

Artículo 89. El Gobierno del Estado garantizará y promoverá la justicia climática de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, con especial atención a los grupos y/o personas en situación de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.

Artículo 90. Dentro de los instrumentos de política estatal de cambio climático, así como la aplicación de la presente Ley, el Gobierno del Estado a través de

las autoridades correspondientes, deberán incorporar y privilegiar los siguientes principios de justicia climática:

I. El Estado reconoce la importancia que tiene la naturaleza como una unidad ecológica y de interdependencia de todas las especies que en ella subsisten, por lo que tiene un valor tutelable en sí misma, en consecuencia su protección y conservación debe ir más allá de su conectividad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas.

II. El Estado reconoce que existe una deuda ecológica, por lo que debe demandar que las industrias extractivas sean estrictamente responsables por todos los impactos del pasado y presente relacionados a la producción de emisiones y contaminantes locales asociados.

III. El Estado debe proteger los derechos de víctimas del cambio climático y de las injusticias asociadas para que reciban compensación, restauración, y reparación
completa por la pérdida de tierra, modo de vida y otros daños, por lo que se les debe proporcionar y garantizar el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

IV. Los procesos de consulta, participación o toma de decisiones sobre los impactos y las acciones climáticas deben ser inclusivos, justos y transparentes, especialmente para las personas o grupos en situación de vulnerabilidad a estos impactos y acciones. Las acciones ante el cambio climático deben apuntar a disminuir las desigualdades estructurales. Las cargas, los impactos y los beneficios asociados al cambio climático se deben distribuir de manera justa y equitativa, promoviendo que aquellas no contribuyan a una mayor marginación en contra de grupos en situación de vulnerabilidad.

V. El Estado debe garantizar la prevención y atención prioritaria a sectores que se ven afectados de forma diferenciada y desproporcionada ante los efectos del cambio climático, para reducir su situación de vulnerabilidad, como las mujeres, las niñas y los niños, y las personas de la tercera edad.

VI. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como otras comunidades locales, son grupos que se ven mayormente afectados por los efectos del cambio climático, debido a que desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus

conocimientos y prácticas tradicionales, por lo que se deben de reconocer apoyando su identidad, cultura e intereses haciendo posible su participación efectiva dentro de los procesos y espacios que establecen la Ley y el reglamento para ello.

VII. El Estado deberá garantizar el acceso a los medios necesarios para brindar el derecho al acceso a vías efectivas de justicia de los migrantes climáticos, independientemente de su origen, identidad o estatus legal.

CAPÍTULO IV

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 91. Toda persona tendrá derecho a que las autoridades en materia de cambio climático, así como la Comisión Intersecretarial y el Consejo, pongan a su disposición la información que les solicite en los términos previstos por las leyes y el Acuerdo de Escazú.

Artículo 92. Toda información generada, administrada o en posesión de las dependencias de la administración pública estatal y municipal en la materia objeto de esta Ley se considera un bien de interés y dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establecen la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado, Acuerdo de Escazú, esta Ley y demás instrumentos normativos aplicables.

TÍTULO SEXTO

VIGILANCIA Y SANCIONES

CAPÍTULO I

RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS

Artículo 93. Las personas servidoras públicas sujetas de esta Ley, serán acreedoras a las sanciones administrativas aplicables por las normas y reglamentos vigentes en sus respectivas materias, para el caso de incumplimiento de sus deberes y responsabilidades, correspondiendo la determinación de dichas sanciones a la autoridad o autoridades competentes.

Artículo 94. Las personas servidoras públicas deberán denunciar ante las

autoridades competentes, las conductas que contravengan las disposiciones de la presente Ley, sin necesidad de comprobar interés o afectación jurídica alguna.

En caso de la presunta comisión de delitos, se dará parte al Ministerio Público.

Artículo 95. Las personas servidoras públicas que contravengan las disposiciones de esta Ley, su reglamento y las disposiciones aplicables, incurren en responsabilidad y serán sancionados administrativamente en los términos de la Ley correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que pudiera existir.

CAPÍTULO II

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 96. Las personas físicas o morales responsables de las fuentes emisoras que sean requeridas por la Secretaría para proporcionar los informes, datos o documentos que integran el reporte de emisiones tendrán la obligación de hacerlo dentro de los plazos establecidos por esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 97. La inspección y vigilancia se llevará a cabo por personal autorizado, aplicando los procedimientos que para el caso establezca la Ley ambiental, así como la normatividad ambiental aplicable vigente en el Estado.

Artículo 98. Las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de personal debidamente autorizado, visitas de inspección, vigilancia y verificación, sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes aplicables.

Artículo 99. El procedimiento de inspección y vigilancia se substanciará conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable vigente en la materia en el estado de Baja California.

Artículo 100. En caso de que las personas físicas o morales responsables de las fuentes emisoras sujetas a reporte no entreguen la información, datos o documentos requeridos por la Secretaría en el plazo señalado, la Procuraduría podrá imponer una multa de quinientas a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin menoscabo del cumplimiento inmediato de dicha obligación.

Artículo 101. En caso de encontrarse falsedad en la información proporcionada, así como incumplir con los plazos y términos para su entrega, la Secretaría

aplicará una multa de tres mil y hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. La multa será independiente de cualquier otra responsabilidad de los órdenes civil y penal que pudieran derivarse. La Secretaría tendrá la obligación de hacer del conocimiento de las autoridades competentes dichos actos.

En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por tres veces del monto originalmente impuesto.

Artículo 102. Las violaciones a los preceptos de esta Ley y sus reglamentos, serán sancionadas administrativamente por la Procuraduría con una o más de las sanciones establecidas en la Ley Ambiental.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Prevención, Mitigación y Adaptación del Cambio Climático para el Estado de Baja California, publicada originalmente en el Periódico Oficial del Estado de Baja California en fecha 01 de junio de 2012, así como sus reformas y adiciones posteriores.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

CUARTO. El Reglamento de esta Ley deberá ser expedido dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.

QUINTO. Las disposiciones reglamentarias y administrativas derivadas de esta Ley deberán ser expedidas dentro de los 365 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.

SEXTO. Los programas, planes y acciones que se deriven de esta Ley deberán ser elaborados y publicados dentro de los 365 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.

SÉPTIMO. Con el objetivo de lograr la neutralidad en emisiones de carbono hacia el año 2050, la Administración Pública del Estado, en el ámbito de su competencia, deberá implementar estrategias tendientes a promover en todos los sectores, acciones para mitigar la emisión de gases y compuestos efecto invernadero y de

adaptación al cambio climático.

A T E N T A M E N T E

JAIME EDUARDO CANTÓN ROCHA

Integrante del Grupo Parlamentario

de MORENA